

Enrique Nalda\*

## **El INAH, la arqueología y la comunidad**

**E**l futuro del INAH, más que el de cualquier otra institución mexicana vinculada a la investigación y conservación del patrimonio histórico, depende de su relación futura con la comunidad a la que se debe. Reflexionar sobre lo que se ha hecho y lo que puede hacerse en esa dirección es, en todo momento, aleccionador y productivo; en este momento es, además, inevitable. Este ensayo tiene el propósito de disertar sobre la relación INAH-comunidad; lo haré desde la perspectiva de la arqueología que se ha practicado en el país, no porque ésta merezca un trato especial —indudablemente mucho de lo que señalamos adelante tiene aplicación a la antropología, en su totalidad—, sino por limitaciones de espacio y, sobre todo, porque creo que es en la arqueología donde la crisis de conciencia es más aguda, sobre todo en cuanto al campo de acción que abre la disciplina, y a los compromisos inherentes a su práctica.

Al respecto hay que señalar que si bien a lo largo de los años el INAH ha desarrollado una cantidad importante de proyectos vinculados a intereses y expectativas comunitarias, en el caso específico de la arqueología —con la posible excepción del Proyecto Cholula de los años sesenta y algún otro esfuerzo, poco reconocido, como el proyecto de manejo de los sitios con pintura rupestre en la Sierra de San Francisco—, ese tipo de actividad ha estado ausente. En la arqueología del INAH no se han dado equivalentes a proyectos como los de historia oral, con su pretensión de dar a conocer múltiples alternativas de una misma realidad; al programa de museos comunitarios; a los proyectos de apoyo a la comunidad en trabajos de restauración de monumentos históricos; al trabajo con parteras y curanderos en el rescate de la medicina tradicional; a las intervenciones en restauración de bienes muebles a petición de las comunidades; y a la propuesta del proyecto original del Museo del Pueblo Maya en Dzibilchaltún, con sus propósitos de recuperar y difundir la cultura popular, prehispánica y moderna del área maya, y en especial del norte de Yucatán.

Quisiera iniciar la disertación con una presentación de las tendencias teóricas y prácticas que se han seguido en la arqueología mexicana, y la inserción que su práctica ha tenido en el ámbito político del país. Mi visión, de entrada, es que la arqueología mexicana como tal hace mucho perdió su carácter; que la práctica arqueológica reciente en este país se ha desarrollado sin vinculación con los problemas nacionales, y en gran medida —e irónicamente para fortuna nuestra— al margen de las corrientes teóricas “vanguardistas” o, si se prefiere, de los modelos “de moda”, avanzados por la academia de países desarrollados. Finalmente, se ha practicado en ausencia de propuestas claras sobre hacia dónde debemos dirigirnos y cómo lograr nuestros objetivos.

### El carácter perdido

Desde cualquier perspectiva, pero en especial desde la de las corrientes más modernas sobre lo que es y debe ser la arqueología, fue con Gamio y su proyecto en Teotihuacan que la Arqueología en México alcanzó una posición de vanguardia. Alcanzó igualmente carácter propio: si algún tipo de práctica arqueológica merece la distinción de ser “mexicana”, sería la que se desarrolló con ese proyecto, y lo sería justamente por su preocupación de articular el conocimiento generado en la investigación con los intereses de la comunidad moderna en la localidad en que se trabajaba.

En una de sus vertientes, el trabajo de Gamio en Teotihuacan pretendía entender el desarrollo histórico de esa población particular y utilizar ese conocimiento en el mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes del valle; se sobreentendía que la apropiación de su historia —en el sentido de tomar conciencia de su papel protagónico—, operaría en los “teotihuacanos” modernos como elemento de cohesión para acciones comunitarias futuras.

Ese objetivo y esa pretensión, sin embargo, no hicieron del trabajo de Gamio algo especial: inquietudes análogas suelen encontrarse entre

quienes creen que el conocimiento del pasado no sólo arroja luz sobre el presente, sino que permite entenderlo mejor y puede guiar nuestras acciones futuras. Lo que hizo del trabajo de Gamio algo especial, fue su insistencia en ver a la población moderna del valle de Teotihuacan como “problema a resolver”. El conocimiento del desarrollo de su atraso era, en verdad, el punto de arranque y no la conclusión de sus esfuerzos. Si Gamio fue un buen exponente de la escuela estadounidense liderada por Boas —por su énfasis en lo local y en el enfoque multidisciplinario—, también lo fue de la corriente posrevolucionaria que, en México, veía como meta prioritaria el combate al atraso social en que se encontraba el país.

Por supuesto, se podría argumentar que el Gamio preocupado por la dignificación de quienes habitaban el valle de Teotihuacan, es decir, el Gamio interesado en cuestiones tan mundanas como el desarrollo local de las artesanías, poco tenía que ver con la arqueología. Detrás de esta categorización estaría la idea de que la arqueología, para merecer un estatuto de disciplina científica, debía estar desligada de la política y de toda acción directa sobre el objeto de estudio que implique una toma de posición sobre la conflictiva que se estudia. Ubicar la disciplina más allá de la observación, participativa o pasiva, y del análisis de la información recuperada, la introduciría, según esa visión, al terreno de lo ideológico, con la consecuencia de que se corromperían los resultados de la investigación.

Una corta digresión por el camino de las posiciones teóricas que se desarrollaron fuera de México, y que fueron acogidas con mayor o menor entusiasmo en este país —o simplemente ignoradas—, demuestra lo equivocado de esa posible crítica al trabajo de Gamio.

### La proximidad a las ciencias naturales

A mediados del siglo xx se ampliaron significativamente las posibilidades abiertas a la arqueología. La aparición de métodos de fecha-

miento absoluto basados en el decaimiento de isótopos inestables, en especial el carbono 14; la disponibilidad de técnicas más refinadas para la restitución de paleoambientes y la definición de patrones dietéticos del pasado, así como la aplicación de sensores de todo tipo en la prospección arqueológica, fueron los causantes de ese ensanchamiento del campo de acción. El empleo de las nuevas técnicas reorientó mucho del trabajo que se hacía. Para una importante cantidad de arqueólogos resultaba impensable, dados esos avances, el emprender una investigación sin colocar primero a la sociedad bajo estudio en el contexto de su ambiente, concretamente de los recursos disponibles. El patrón de subsistencia, definido por los límites impuestos por los factores del medio ambiente, se convirtió en aspecto medular de toda investigación, aun para aquellas que estaban relativamente alejadas de la prehistoria y de toda posibilidad de cambios ambientales significativos entre el presente y la fecha en que se desarrolló la sociedad bajo investigación.

Inmerso en una disciplina que echaba mano de técnicas sofisticadas derivadas del campo de las ciencias naturales, el arqueólogo empezó a adquirir la imagen de "científico". Dejó de ser el "sabio" de finales del siglo pasado, de ser la persona que había que escuchar, que se pasaba su vida leyendo y revisando minuciosamente los monumentos del pasado, para transformarse en un investigador de bata blanca que, ahora sí, apoyado en las ciencias naturales, iba a darnos a conocer un pasado libre de especulaciones. Esa nueva imagen popular llegó a conquistar al mismo arqueólogo, quien se fue alejando cada vez más de las ciencias humanas y de la preocupación de dar significado social a sus trabajos. No es irónico el que junto con un avance en las posibilidades abiertas a la arqueología por las ciencias naturales, se haya dado un estrechamiento del campo de la interpretación arqueológica. A pesar de algunos llamados que se hicieron en esos años a comprometerse con una "arqueología social", a ver la disciplina como una especie de "paleoetnología" y, a pesar de las ocasionales llamadas de atención sobre el

hecho de que la arqueología es un simple segmento de la antropología, en la práctica, muchos de los arqueólogos trabajaban en contra de la corriente, digamos, "antropológica" y de "compromiso social".

De hecho, resulta interesante que ese llamado a la cientificidad, vinculado a los avances de los años cincuenta y sesenta, haya concluido justamente en lo contrario de lo que se perseguía: si bien esa arqueología de "científicos" frecuentemente cuestionaba la validez de los trabajos descriptivos, demandando interpretaciones desde la perspectiva de lo social, mucho de lo que se hizo en esa época tuvo como producto final verdaderas monografías. No es de extrañar: los trabajos de restitución paleoambiental y dietética los hacen, en gran medida, técnicos asociados, trabajando en relativo aislamiento; el producto lógico de este tipo de esfuerzo es la suma de textos sobre temas muy específicos en espera de ser integrados en una interpretación de orden cultural, espera frecuentemente inútil, bien porque hay poco que integrar, bien por no existir la capacidad o preocupación de hacerlo; conducen justamente a una presentación final ennumerativa, a listados de lo que comían quienes vivían en el pasado, qué recursos explotaban y cómo fue cambiando el paisaje a través de los años.

Por supuesto, esto no quiere decir que los productos de investigaciones de ese tipo no sean de interés para la arqueología; son, por el contrario, aportaciones importantes y normalmente muy necesarias. Lo que está a discusión es el valor específico que se les debe asignar cuando se considera el programa mayor de la arqueología, el cual tiene mucho más que ver con la historia de las sociedades humanas que con otra cosa; el problema es el peligro de que esas investigaciones paleoambientales y de dieta prehistórica pasen a ser objetivos en sí mismos y no simples aspectos para integrar una totalidad que está por completo fuera del campo de las ciencias naturales; el problema es el manejo de esos aspectos al margen de la cultura y de la historia.

Mucho del trabajo en México se hace bajo esta visión “laboratorista/monográfica”; se le considera hoy día, de hecho, como la arqueología modelo: la arqueología por excelencia.

La idea de que la estrecha relación que se dio a mediados del siglo con las ciencias naturales hacían de la arqueología una disciplina especial, fue reforzada por la consideración adicional de que la materia prima sobre la que actúa el arqueólogo es, en efecto, algo muy diferente al de otras disciplinas: el registro arqueológico, según estas ideas, requería para su manejo y análisis de instrumentos *ad hoc*; la suma de estas creencias colocaban a la arqueología en una categoría de ciencia única, con su sistema conceptual propio y con enfoques, estrategias, modelos y formas de presentación de resultados específicos a esa categorización. Cualquier intento de conciliar la arqueología con la lógica y procedimientos distintos de los generados a su interior, producirían, según esta visión, resultados discordantes con su propia naturaleza.

### La pretensión de estar haciendo ciencia dura

En los años sesenta se hizo sentir el llamado a hacer ciencia a la manera que lo hacían, supuestamente, las ciencias naturales. Con la entrada de la Nueva Arqueología, la pretensión de producir leyes de aplicación general se convirtió en la meta de la investigación modelo; en el viaje se revivió y revisó la teoría evolucionista y se adoptaron principios básicos de la teoría de sistemas.

La propuesta sucumbió justamente por su incapacidad de satisfacer las expectativas que generaba. De los múltiples esfuerzos que se hicieron bajo los lineamientos metodológicos de la Nueva Arqueología —o, como se llama ahora, arqueología procesual—, no emergió ninguna propuesta de ley general. De hecho, muy pronto se abandonaron intentos de ese tipo; en su lugar se buscaron “leyes de rango medio”, en especial las que vinculaban lo observado con la realidad subyacente. Irónica-

mente, los esfuerzos más reconocidos de esa cruzada se deben a quienes buscaron leyes de aplicación a la formación de los depósitos arqueológicos, un tema frecuentemente caracterizado por lo obvio de sus conclusiones.

El llamado paradigma de la Nueva Arqueología llegó a México, se paseó por las aulas de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y se extinguió sin afectar el ejercicio de la arqueología tradicional que se practicaba en el país. No llegó a convencer, quizá porque no se entendió lo que pretendía. En cierta medida, ese desenlace resultó desafortunado. Y fue así porque en el paquete de la Nueva Arqueología, había buenas propuestas. La primera de ellas fue una llamada de atención al hecho de que no se podía seguir proponiendo trabajos de campo sin plantear de manera explícita cuál era el problema arqueológico a resolver y sin fijar una estrategia *ad hoc* para resolverlo. Esto, que suena obvio, era importante señalar si se considera que la mayor parte de las investigaciones arqueológicas que se planteaba en esa época —y que siguen planteándose— tenían como objetivo el conocer algo sobre lo que se tiene poca información, es decir, estaban —y están— orientadas a crear un *corpus* fáctico (con todo lo que dicho planteamiento conlleva), y suscriben la tesis de que algo emergerá, por sí solo, del cúmulo de datos.

Más importante aún fue la insistencia en la analogía etnográfica como recurso para el planteamiento de hipótesis a manera de conclusiones o como propuestas de nuevas investigaciones. La recomendación es importante no sólo por el valor mismo que implica el conocimiento etnográfico —y etnohistórico— para la interpretación del registro arqueológico, sino también porque inducía un acercamiento a otras ramas de la antropología, porque reafirmaba la unidad de la disciplina, sugería el trabajo interdisciplinario y obligaba a reflexionar sobre totalidades sociales. Todo esto operaba en contra de la vía alternativa, por demás estéril, que aislaba a la arqueología al ser vista como una disciplina peculiar.

El bajo impacto de la Nueva Arqueología en México tuvo su razón de ser. Se enfrentó a una tradición antropológica muy firme, que veía a las sociedades humanas como totalidades en movimiento, inestables, conflictivas, y que en México había permeado el campo de la arqueología. El concepto fundamental que da forma a esta visión es el de contradicción, concepto totalmente ausente en el discurso conductista frecuentemente suscrito por la Nueva Arqueología, en el que el valor adaptativo de una acción es la métrica con la que se juzga el ajuste social o individual. Si lo disarmónico, lo disfuncional, era la regla en la tradición que permeaba la arqueología en México, la propuesta de la Nueva Arqueología, esencialmente funcionalista, no podía prosperar: las diferencias se presentaban en el nivel teórico más alto posible.

Pero quizá la parte más conflictiva en el paquete de la Nueva Arqueología era la forma peculiar de ver la relación entre el investigador y el objeto de estudio; para esa “escuela” la relación era de independencia. En México, en ese momento, en el campo de la antropología se manejaba una idea diametralmente opuesta: reconociendo en el investigador el estatuto de sujeto históricamente determinado y al objeto de estudio el carácter de realidad de la cual el investigador es parte, se postulaba que la relación entre ambos era una relación de “complicidad”, mediada por una concepción particular del investigador de su propia realidad. En lugar de la pretensión de hacer ciencia a la manera de las ciencias naturales, lo que se proponía en México era hacer ciencia normal, al interior de discursos específicos; en esa época, el discurso dominante era el materialismo histórico.

La Nueva Arqueología emergió en Estados Unidos, en plena guerra de Vietnam... y al margen de ella. No debe sorprendernos que haya sido de esa manera: si, como argumentaban quienes defendían la Nueva Arqueología, la arqueología debía ejercerse desde el campo de la ciencia en general —en el sentido de que era una realidad que existía independientemente del

observador, y era apropiable a condición de mantener esa relación de independencia, de externalidad—, cualquier acercamiento a esa realidad, portando juicios de valor, posiciones políticas, ideas preconcebidas, o ideas concebidas y aplicables a nuestra propia realidad, sólo producirá interpretación ideologizada, acientífica. En el desarrollo de su propia disciplina, todo involucramiento con los problemas que enfrentaba su propia sociedad implicaba necesariamente, para los practicantes de la Nueva Arqueología, un desvío con respecto a su manifiesto.

### El viejo enfoque, el nuevo enfoque

Desde hace más de una década se ha hecho una fuerte crítica a los postulados de la Nueva Arqueología; la contracorriente se ha desarrollado bajo la etiqueta de arqueología “posprocesualista” y se expresa como un rechazo a la plataforma positivista y la visión sistémica de la cultura, al tiempo que reivindica el papel del individuo en la transformación social, asigna un espacio relevante al orden simbólico en el análisis e interpretación del material arqueológico, y aboga por el estudio de lo particular.

Quienes se encuentran en esta contracorriente no constituyen un grupo homogéneo; entre ellos existen, sin embargo, principios compartidos. En general, para el arqueólogo posprocesualista, los datos se buscan y se analizan con base en teorías específicas: datos y teorías, de esta manera, guardan entre sí una relación de dependencia; los datos llevan, por tanto, un sesgo de origen. Esta posición no implica renunciar a todo esfuerzo por adquirir un conocimiento objetivo, pero de alguna manera conduce a aceptar que ese conocimiento es el último de una serie infinita de términos que no son sino aproximaciones, esto es, hipótesis escogidas entre múltiples opciones de interpretación de los datos recuperados en nuestras investigaciones. Para estos mismos académicos, la aparente contradicción se salva si se acepta, por un lado, que hay datos sin sesgo, formando una especie de “nú-

cleo" fáctico que nadie puede impugnar —pues tienen la característica de ser inmanipulables— y que son precisamente los "datos duros" que defienden los empiristas a los que se combate y, por otro lado, se sostiene que el sesgo de los datos vinculados a teorías específicas es posible eliminarlo a condición de ser conscientes de su existencia, es decir, a condición de dejar de creer en lo que creemos, a condición de tomar el punto de vista de "el otro". En esta posición "intermedia", entre quienes niegan toda posibilidad de ciencia neutra y quienes quieren hacer ciencia, se confronta el empirismo dejando abierta la posibilidad de su ejercicio.

El arqueólogo posprocesualista comparte la idea de que el conflicto interno es el elemento central en el cambio social; es, por tanto, un crítico de las posiciones sistémicas y conductistas de la arqueología procesualista: rechaza ver al cambio social como el producto de un proceso adaptativo, y considerar al individuo como agente pasivo frente a un ambiente natural apabullante y un sistema de normas que limita en gran medida su accionar. Como contrapartida de la visión en la que el análisis social se limita a la puesta en juego de los aspectos centrales —prácticamente excluyentes— del proceso adaptativo (recursos, tecnología, producción, comercio), el arqueólogo posprocesualista propone una realidad social en la que las creencias son algo más que epifenómenos. En esa óptica, el individuo crea y transforma el sistema de valores, creencias, símbolos y significados que constituyen la cultura, y lo hace activa y continuamente, en pleno uso de su capacidad inventiva.

Más importante que su vuelco antipositivista y anticonductista, la arqueología posprocesualista cuestiona el sistema de valores de la sociedad contemporánea y los modelos de desarrollo que ha impuesto. Cuestiona, por tanto, proyectar hacia el pasado nuestra visión de la sociedad moderna, con sus valores en crisis y sus tesis ocultas sobre lo que es "natural". En este sentido, el posprocesualismo en la arqueología se inserta en la tendencia general del pos-

modernismo que se inició a mediados del siglo XX, justamente como una reacción a la sociedad que emergía de la Segunda Guerra Mundial y la aceptación implícita del modelo del "anglo-sajón, varón y protestante", como referente supremo. El rechazo de estas posiciones abre al investigador la posibilidad de construir historias desde perspectivas múltiples: historias congruentes con valores étnicos, culturales o de género.

El antiprocesualismo va un paso más adelante: declara insostenibles e insolentes las definiciones de arqueología a la que nos ha sometido el diletantismo: "es lo más divertido que puede hacerse con los pantalones puestos", o "es algo que pagaría por hacer y que me pagan por hacer". Tilley, a propósito de esta cuestión, ha escrito:

[Glynn] Daniel declara que el placer de hacer arqueología es lo que justifica su práctica...resulta difícil aceptar tal tesis hedonística, en especial dado que la mayor parte de la literatura arqueológica, es todo menos placentera como lectura. Sin embargo, el principio a la base del comentario de Daniel parecería ser que el pasado hay que constituirlo para el placer idiosincrático de una elite académica de arqueólogos, con costos asumidos por todos los demás.<sup>1</sup>

Este movimiento hacia un compromiso con la sociedad moderna implica una redefinición de objetivos y la aceptación de otra obiedad. Nos referimos a que tratándose de una disciplina en donde, irremisiblemente, uno se acerca al objeto de estudio desde su propio sistema de valores, todo análisis social es un acto político, implica una toma de posición frente a múltiples opciones de concebir y exteriorizar la realidad que se vive.

No hace falta arrastrar la política al campo de la Arqueología, siempre ha estado ahí. Todas las teorías arqueológicas han estado inextricablemente atadas con

<sup>1</sup>Christopher Tilley. "Archaeology as socio-political action in the present". en *Reader in Archaeological Theory: Post-Processual and cognitive approaches*, David S. Whitley (ed.), Routledge, London, 1998, p. 321.

creencias políticas y valores ideológicos...Cualquier intento de reducir la arqueología a la ciencia del artefacto conduce al silencio.<sup>2</sup>

La crítica posmodernista a la arqueología es un reflejo relativamente tardío de una corriente general que se inicia a los pocos años de haber terminado la Segunda Guerra Mundial y que afecta, antes que otros, al arte y la arquitectura. Es una crítica que llega a extenderse a la arqueología no tanto por el fracaso del paradigma de la Nueva Arqueología, como por el naufragio del socialismo real y del thatcherismo-reaganismo: la caída del Muro de Berlín abrió múltiples posibilidades de análisis social; entre otras permitió replantear el papel del individuo y de la ideología en la dinámica social; alentó el estudio de aspectos hasta entonces subsumidos en explicaciones “globales”: la etnicidad, el género y el grupo social alcanzaron nuevas dimensiones; las demandas de las naciones y comunidades emergentes se convirtieron en preocupaciones comunes y, en el campo de la arqueología, tomaron interés especial los temas de la cosmología y la religión de las sociedades del pasado, así como los estudios iconográficos. El fracaso del modelo económico que tantas expectativas creó desde mediados de la década de los setenta, basado en la idea de que mayores ganancias de capital producirían una acumulación y un ritmo de inversión acelerado que, en última instancia, permearía toda la estructura social, aumentando la tasa de empleo y mejorando la calidad del asalariado, reforzó las dudas que se tenían sobre las bondades del capitalismo y sobre las posibilidades de desarrollo social, en especial en los países del Tercer Mundo.

México, lejos del Muro de Berlín, y relativamente distanciado de los postulados del thatcherismo-reaganismo, fue inmune a los cambios del paradigma. Pero lo fue, más que nada, porque lo que se estaba proponiendo llevaba muchos años de practicarse. Es por ello que las corrientes posprocesualista y posmodernista se dis-

cuten hoy día en ambientes académicos pequeños, más como curiosidad que como novedad. No obstante, ocasionalmente se nos ofrecen como corrientes de vanguardia —europeas en este caso—, que hay que entender y asimilar.

### Las posiciones derivadas de otra realidad social

La idea de que datos y teorías forman un par armónico —dialéctico, si se quiere—, y de que no hay independencia entre objeto y sujeto en el análisis histórico, han estado siempre presentes en el trabajo arqueológico que se realiza en este país; lo primero se ha manifestado como un claro rechazo a la idea de que los tipos existen por sí solos, que hay que descubrirlos y que es tarea de los arqueólogos el poner en uso las mejores técnicas estadísticas posibles para encontrarlos. Lo segundo es producto de la inserción de la arqueología mexicana en una larga tradición antropológica —marxista a partir de 1968— que reconoce lo “otro” como diferente, que requiere del trabajo participativo y, en su posición extrema, como algo que debe transformarse y en cuya transformación el antropólogo debe tomar parte como elemento activo. Si algo ha caracterizado a la antropología mexicana, ha sido justamente esa pretensión de transformación, y no sólo a partir de la producción de conocimiento, sino de la utilización de ese conocimiento para la participación más racional en la transformación social. Ésa fue, de hecho, la arqueología de Gamio en Teotihuacan, tomada en su totalidad.

Esa misma tradición antropológica, repetimos, previene contra el análisis parcial —sin que esto implique que invalide el análisis de segmentos de esa totalidad— y concibe el fenómeno social como el producto de un continuo conflicto de intereses. La primera imagen del análisis normal entre arqueólogos mexicanos ha sido siempre la de la inestabilidad, la de la tensión social, la del colapso; la homeóstasis es tan extraña para este arqueólogo como lo es el concepto de ajuste adaptativo permanente, es decir, la de la funcionalidad de las acciones.

<sup>2</sup> *Ibidem*, p. 316.

En estos términos, en los de la existencia de una larga tradición antropológica, la de una radicalización hacia 1968 de las posiciones materialistas que esa tradición lleva implícitas, y la de relativa fidelidad a esa tradición —a pesar de los coqueteos de la arqueología “científica” y de algún desliz menor hacia posiciones de la arqueología procesualista americana (desliz muy circunscrito a algunos de quienes trabajamos en la ENAH en la época en que se hizo sentir con más fuerza el impacto de esa “escuela”)— es posible señalar que, en México, en arqueología (concretamente en la arqueología propuesta por algunos de nosotros) no ha pasado nada en los últimos treinta años... para fortuna nuestra. Para el mundo desarrollado hizo falta que se cayera el Muro de Berlín y se evidenciara el fracaso del thatcherismo y el reaganismo, para poderse ver con claridad la conexión entre arqueología y política; para que se transparentara la necesidad de entender y participar de manera más abierta y decisiva en nuestra propia sociedad. Para México, existía una experiencia previa, la de Gamio; un intento frustrado posterior con Bonfil como director del Proyecto Cholula, que mantuvo viva esa posibilidad, y un ramalazo en 1968 que hizo que se cuestionara todo, incluida la esencia de la arqueología y su razón de ser en México. Todo eso fue suficiente para mantener el espíritu que otros habían perdido en el largo peregrinar a través de la falsa expectativa de los arqueólogos de bata blanca y de los procesualistas. Hoy, a treinta años de distancia —fecha en que el impacto de la Nueva Arqueología se intensificó—, hay cierta resonancia con los planteamientos de la vanguardia posprocesualista. Falta todavía por desprenderse del último tinte empirista, abandonar la idea de que es posible eliminar todo sesgo o “*bias*” y asumir la posición de que lo que diferencia las teorías con base en las cuales se buscan datos y se producen interpretaciones son posiciones sociales.

### Nuevas presiones, nuevas propuestas

Hay mucho por hacer en el campo del desarrollo teórico, o si se prefiere utilizar el término,

de la práctica teórica. Para lograr nuevos avances, será necesario primero ser conscientes de que nuestras interpretaciones llevan una carga ideológica, que hay que leer críticamente los textos arqueológicos —en primer lugar los nuestros—, reinterpretarlos, dismantelarlos y reconstruirlos en términos de los múltiples enfoques y teorías de aplicación potencial. Las posibilidades abiertas al respecto son enormes e inciden directa e inmediatamente —y prioritariamente— sobre la producción de textos para la enseñanza de nuestra historia, así como sobre la elaboración de guiones y diseños museográficos. Hay que estar claros, sin embargo, que no se trata de ponerse al día en enfoques teóricos. De lo que se trata es de reflexionar sobre lo que se ha hecho en concreto, congruente con estas posiciones teóricas, mantenidas en México desde hace mucho tiempo, y qué es lo que debemos hacer en el futuro. Sobre todo, qué es lo que debemos hacer a fin de dar sentido social a nuestras investigaciones, es decir, de articular nuestras inquietudes con los problemas de las comunidades donde trabajamos; en otras palabras, reflexionar sobre nuestro propio trabajo desde el “modelo Gamio”.

A diferencia de otras instituciones que operan en el campo de la antropología y de la historia, el INAH, dadas las funciones que por ley le corresponde cubrir, tiene la responsabilidad de diseñar programas y estrategias que induzcan la participación comunitaria en el desarrollo de sus actividades; en respeto a la mejor de sus tradiciones, le toca, además, el reconocer las carencias de esas comunidades y, en la medida de lo posible, apoyar sus demandas de bienestar social. Esta dualidad de compromisos está bien expresada en los considerandos del proyecto de ley que envió Cárdenas al Congreso en 1939, cuyo desenlace es precisamente la Ley Federal sobre Monumentos...que da razón de ser al INAH.

Al arqueólogo le toca reflexionar y actuar en esa doble vía. Desde luego, no todos los proyectos arqueológicos podrán satisfacer ese *desideratum*: hay multitud de trabajos que, por su ca-



rácter, no podrán articularse con comunidad contemporánea alguna, excepto la nacional: exploraciones en sitios alejados de centros de población y, desde luego, la multitud de trabajos, por demás necesarios, de análisis de materiales recuperados en las intervenciones arqueológicas, no son buenos candidatos a este tipo de enfoque. Habrá otros proyectos para los cuales la definición de la comunidad con la que se va a trabajar resulte ser extremadamente difícil: casos como, por ejemplo, Paquimé y Casas Grandes —el primero la zona arqueológica, el segundo la comunidad directamente involucrada en su defensa y los beneficios derivados de su operación— son excepcionales; más comunes son las relaciones difusas y dispersas como las que guarda Teotihuacan con las comunidades alrededor de la zona arqueológica; o las del Templo Mayor y la Ciudad de México; o las del sitio de Palenque y el poblado del mismo nombre y las comunidades chol, tzeltal y lacandona asentadas en la región. Pero esto no invalida el llamado a ser conscientes de los problemas que enfrenta la conservación y difusión del patrimonio cultural y, por tanto, de la necesidad de establecer vínculos estrechos con las comunidades donde realizamos nuestros estudios: no olvidar que la defensa de nuestro patrimonio cultural e histórico es imposible sin la participación de esas comunidades, a veces, sí, difíciles de definir y de delimitar.

El problema es, ¿cómo lograr esa vinculación? El primer paso hacia ese objetivo se logra cuando la comunidad aprecia la importancia de ese patrimonio y se interesa en su protección. Algunas comunidades lo hacen espontáneamente: para ellas existen lugares y objetos que hablan de su historia, que tienen que ver con su cotidianidad, que expresan su visión del mundo, y remiten a sus antepasados; que dan significado a su existencia como comunidad y operan como instrumentos de cohesión social. A este tipo de situación pertenece, por ejemplo Quitovac, lugar de creación del mundo pápago; el camino del peyote de los huicholes, y algunos de los centros ceremoniales del área maya: ruinas arqueológicas que son sitios de

culto hoy día, como lo fueron en el pasado, o sitios asociados a la Guerra de Castas. Con comunidades de ese tipo, la tarea es diseñar conjuntamente estrategias y programas para la mejor preservación y difusión de ese patrimonio, y trabajar con ellas a fin de evitar que tomen ese patrimonio con carácter de exclusividad, ignorando su esencia colectiva, nacional. Esto implica, entre otras cosas, la elaboración de leyes donde se explicita esa relación entre patrimonio cultural y comunidad, así como entre ésta última y la historia nacional.

Desafortunadamente, los casos mencionados son los de menos: los de más son los de las comunidades que, sencillamente, no reconocen relación alguna con el patrimonio local o regional; en unos casos, como el de los recientes centros de población en el sur de Quintana Roo, porque se trata de restos de culturas diferentes y distantes; en otros, porque aun existiendo relación ancestral, no es apreciada en todo su valor y, en otros más, al revés, sin relación ancestral, reclaman derechos sobre un bien considerado de importancia económica, argumentando herencia étnica (es el caso, por ejemplo, de los habitantes de los poblados localizados alrededor de la zona de monumentos arqueológicos de Teotihuacan).

¿Cómo lograr que estas otras comunidades se interesen por el patrimonio que se encuentra en su vecindad y decidan defenderlo? ¿Cómo hacer, en fin, que quienes frecuentemente se encuentran entre los principales agresores (conscientes o inconscientes) de ese patrimonio, se conviertan en los custodios o agentes más activos y confiables en su protección y en el manejo responsable del mismo? No hay respuesta única para la totalidad de las comunidades en esas circunstancias, por ello la pretensión de legislar para obligar al cambio de actitud resulta un acto estéril. Le corresponde al INAH diseñar el programa que aproveche disposiciones, coyunturas y acciones en marcha. Pero también les corresponde a las comunidades que se han acercado al INAH mostrando un interés por defender ese patrimonio, porque ven en él algún ele-

mento que les dé fuerza como grupo frente a demandas concretas sobre bienes específicos; a las comunidades que han buscado en el INAH apoyo para el desarrollo de un sitio arqueológico o histórico como atractivo turístico; a las comunidades que han pedido al INAH apoyo para la restauración de sus monumentos históricos; a las comunidades que han solicitado al INAH asistencia en el diseño y equipamiento de un museo local, comunitario o escolar; a las comunidades que han mostrado una disposición para construir y dar a conocer su historia; a las comunidades que quieren hacer algo por reforzar sus bienes comunitarios: iglesias, casas de cultura, palacios municipales, pero que, en ausencia de proyectos y apoyo técnico adecuados, se ven obligados a construir banquetas para aprovechar fondos extraordinarios; a las comunidades que han sabido expresar en acuerdos con la federación su interés por administrar bienes arqueológicos; a las comunidades que han desarrollado proyectos de importancia al margen —sin duda con toda intención— de apoyos potenciales del INAH, pero que seguramente, frente a un Instituto más propositivo y colaborador, habrían solicitado trabajar conjuntamente; para éstas y otras comunidades, existen respuestas y propuestas particulares, *ad hoc*. El INAH debe comprometerse con ellas prioritariamente porque dadas las condiciones, las posibilidades de éxito son mayores.

Para que la acción conjunta prospere es necesario, sin embargo, que se den varias condiciones. Primero, que nuestra visión centralista pierda fuerza; que la descentralización efectiva de la cultura se convierta en realidad y no en una simple declaración de intenciones, y que la administración mancomunada de los bienes culturales se vea como una opción prometedoras. Entre otras cosas, esto requiere limitar la acción federal, fundamentalmente al aspecto normativo; requiere por parte de los arqueólogos el fin de la pretensión de formar una elite académica que tiene como responsabilidad única su compromiso con la investigación, desdeñando el acercamiento a la comunidad que no sea para instruirle cómo dejar de

dañar el patrimonio arqueológico; entender que existe una comunidad que espera resultados; que quiere saber de la utilidad de lo que se hace; que quiere participar de los posibles beneficios derivados de las investigaciones y de los trabajos de restauración.

No sólo será necesario dar a conocer el producto de nuestras investigaciones, necesitamos también entender la idea que la comunidad tiene de su propia historia: no se trata de hacer la historia para la comunidad, a nombre de la comunidad, sino de construir una historia —o múltiples historias— con la comunidad, para ella y para el resto del país. La idea de que vamos a producir una historia, inexistente hasta nuestra llegada; de que vamos a erradicar concepciones falsas de la comunidad sobre su pasado, debe olvidarse. Debemos trabajar con más humildad: en la mayor parte de los casos, ellos tienen más que enseñar. Se trata de aprovechar la diversidad, darla a conocer junto con las alternativas de interpretación. Esas múltiples opciones serán las que se lleven al museo de sitio, local o comunitario; contribuyendo, de esta manera, a una presentación dinámica en la que el visitante se vea reflejado en la museografía en la medida que es un elemento activo en su producción. Deberá cuidarse, sin embargo, que la visión desde la perspectiva de la etnicidad, no se transforme en un proyecto excluyente, desintegrador de la fuerza que la multietnicidad genera por sí misma, ni enmascarador de la existencia de una posición social. A la visión localista, uniétnica, deberá añadirse la complementariedad de lo regional y lo nacional, de lo pluriétnico.

El arqueólogo tendrá que responder a las demandas de participación en la administración de las zonas arqueológicas: es por naturaleza, el gestor lógico de la comunidad en esta cuestión. Hasta ahora esa participación ha sido indirecta, como consecuencia del desarrollo del turismo; excepcionalmente ha sido vía la entrega de fondos para proyectos diversos, normalmente desvinculados de las tareas asociadas a la protección, investigación y difusión del patrimonio cultural; son fon-

dos derivados del cobro por la visita a las zonas arqueológicas, y llegan a la comunidad vía el gobierno estatal. Si se quiere romper el caciquismo y el control político que lo sustenta, será necesario, primero, replantear los convenios del INAH con las entidades federativas que tienen que ver con la operación conjunta de zonas arqueológicas y unidades de servicios en ellas; pero igualmente importante es, en el futuro, trabajar integrando miembros de las comunidades afectadas, a los trabajos arqueológicos con carácter de especialistas futuros en el manejo de la zona, que adquieran con el desarrollo de los trabajos una perspectiva distinta de la común, en la cual se ve al patrimonio arqueológico, en especial en los lugares donde los sitios tienen un alto potencial turístico, como simples instrumentos para generar ganancias. Interesa llegar a acuerdos con estas comunidades para que reciban ellos, de manera directa, sin mediación, fondos para el desarrollo local y regional. Interesa, igualmente, formar cuadros locales de alto nivel de preparación, profesionalismo y visión amplia sobre el patrimonio arqueológico, a fin de asegurar un buen desempeño en la administración conjunta, federación y comunidad local de las zonas arqueológicas.

Es necesario ser muy claros en cuanto a la distinción entre comunidad y otros niveles de organización social o política. El que nos interesa como agente potencialmente imprescindible en la protección del patrimonio arqueológico es la comunidad, es decir, el o los pueblos que se encuentran en el área alrededor de la zona arqueológica. Son ellos los que se verían directamente afectados por la carga que implica la vigilancia, la defensa y el mantenimiento básico de las zonas arqueológicas; son ellos, por simple justicia y para crear las condiciones económicas que les permita cubrir esas responsabilidades, los que merecen la participación de los beneficios directos asociados al manejo de las zonas arqueológicas. Otros niveles, en especial el estatal —y quizás el municipal— son, en este contexto, de importancia menor; de hecho, como señalamos arriba, normalmente des-

virtúan las intenciones detrás de la participación en los beneficios por la visita a las zonas arqueológicas, llegándose a convertir los fondos en elemento de manipulación: su utilización en un esquema de favores mutuos atenta no sólo contra el patrimonio arqueológico sino también contra el desarrollo democrático del país. A fin de lograr este cambio en el centro de gravedad de los beneficios asociados a la visita de las zonas arqueológicas, quizá sea necesario revisar la legislación vigente.

Ocasionalmente, el arqueólogo tendrá que llevar su gestión más allá de lo arqueológico estrictamente hablando: las frecuentes demandas sobre recursos naturales ha puesto en marcha, en otros países, proyectos interdisciplinarios en que antropólogos sociales, historiadores (incluidos arqueólogos) y abogados participan como investigadores y gestores; la restitución de bienes culturales a la comunidad, y la exposición de esos artefactos, ha inducido trabajos del mismo corte, con la participación adicional de museógrafos.

El arqueólogo deberá darse a la tarea de proteger el entorno de las zonas arqueológicas y de combinar esfuerzos a fin de preservar recursos culturales y naturales, considerándolos como un par indisoluble en una política de defensa integral de las zonas arqueológicas, incluidos no sólo espacios no construidos, internos, sino también visuales, entorno general y zona de amortiguamiento.

Antes que nada, sin embargo, será necesario que el INAH tome esta preocupación como problema central en sus programas de arqueología. Deberá recuperar el espíritu de Gamio, perdido en la arqueología pero presente en otros campos de la antropología y en otros proyectos del INAH, para dar sentido a una práctica que hoy día se encuentra ensimismada en sus pretensiones pseudo-científicas. También será necesario que el INAH eleve a la categoría de fundamental el trabajo interdisciplinario con clara vinculación a las necesidades de la comunidad.

Un enfoque de este tipo demanda que el INAH revise su esquema de prioridades, que piense menos en lo único, lo deslumbrante, lo políticamente ventajoso; que piense más en lo cotidiano, y en que si bien, en última instancia, el patrimonio es de todos, quienes están más directamente involucrados en su defensa —quíéranlo o no— son las comunidades que se encuentran en las regiones donde existen sitios arqueológicos, monumentos históricos y expresiones culturales por rescatar y difundir. Hay que escuchar con más atención sus demandas. Pensar más en lo local, menos en lo estatal, y dejar a la federación la norma, la supervisión y el apoyo a la iniciativa comunitaria. Esto, por supuesto, implica además cambios a la ley a fin de reforzar la descentralización, de ubicar en las entidades federativas la responsabilidad por definir y controlar el patrimonio; de definir y comprometer tareas prioritarias; de definir la responsabilidad de la localidad; de dar salida a las demandas de las comunidades indígenas con respecto a sus prácticas y reconocimientos; de definir la participación de las comunidades en los beneficios derivados de la administración de los bienes culturales. Los cambios deberán ser muchos, y los investigadores del INAH deberán asumir una posición de vanguardia con respecto a esas modificaciones, rechazando una defensa gremial que se traduzca en una negativa a toda revisión por el temor de que al abrir ese tipo de debate se puede poner en peligro alguna conquista laboral.

El llamado a la interdisciplinariedad no debe entenderse como una petición de persistencia, una al lado de la otra, de las diferentes especia-

lidades de la antropología, todas, digamos, bajo un mismo techo (cosa que no ha ayudado nada a la interdisciplinariedad), sino como la incorporación efectiva de especialistas diversos de la antropología en proyectos concebidos como tales, que requieren de tareas múltiples para dar respuesta a las demandas integrales de la comunidad.

Una aclaración final: es evidente, por todo lo señalado, que este llamado a adoptar un nuevo enfoque —el viejo enfoque de Gamio— en el ejercicio de la arqueología no está, de ninguna manera, peleado con la excelencia académica; no implica una depauperización de la producción arqueológica. La invitación a trabajar con la comunidad —en vez de a nombre de ella— va acompañada de una continua superación de técnicas y métodos, de un mayor rigor en la investigación y de una mejor producción terminal. No solamente no son incompatibles: operan en el mismo plano. Sobre el particular hay que recordar que lo político siempre ha estado en el campo de la arqueología; es al interior de una arqueología irremisiblemente política que se hace el llamado a una articulación más consciente, más explícita, con los problemas de la comunidad, y a una articulación más comprometida con la academia. El tipo de arqueólogo que se requiere para un programa de esa naturaleza, será el mejor preparado en técnicas y métodos arqueológicos, el que tenga una visión más amplia del campo de la antropología, del medio ambiente y de la comunicación, y el que sepa poner ese conocimiento y habilidades al servicio de la comunidad a la que se debe.